

# las lecciones revolucionarias

carlos  
núñez

## de abril de 1965

*El reloj de la historia se detiene pero no se atrasa.* Con esta frase (cuyos orígenes pueden rastrearse en un libro de Juan Bosch, *Crisis de la democracia de América en República Dominicana*) el coronel Francisco —Francis— Caamaño respondió mi pregunta sobre el destino final de la rebelión constitucionalista que lo contó como principal dirigente en abril de 1965. La entrevista citada se desarrolló en Londres, diez meses después de aquel estallido, abortado por la intervención militar norteamericana; el hombre que me hablaba, luciendo un fino *jumoir* de seda y ofreciendo cigarrillos importados en el elegante departamento del Palace Gate que ocupaba como agregado naval de la embajada dominicana en Gran Bretaña, parecía tener poco que ver con el corpulento y hosco militar, tocado con un Stetson de anchas alas, que las radiofotos nos habían acercado durante aquellos días sangrientos y angustiosos. De hecho, el cambio mayor se había producido por debajo de esas apariencias, y en un sentido enteramente opuesto al que ellas parecían indicar: porque este coronel que se había especializado en West Point y que alguna vez estuvo vinculado a la policía de Trujillo, que comenzó repudiando la corrupción de sus colegas encaramados en el poder y terminó encabezando una insurrección popular (nacida de un alzamiento castrense que, insólitamente, proponía restaurar la constitución en vez de pisotearla), era ya entonces una viva encarnación del antimperialismo, un caudillo en proceso de maduración política, un hombre que había sentido quebrarse dentro de sí los mitos que durante décadas han mantenido a América Latina en la miseria y la sumisión.

Veinte meses después, *Francis Caamaño* desaparecía misteriosamente, sin que hasta hoy se haya sabido de su destino. Pero quizás este mismo misterio pueda ser insertado sin violencias en la historia de un hombre que en alguna medida refleja la historia de su país, la historia del continente. El reloj no ha atrasado, pero tampoco habrá de quedar demasiado tiempo detenido.

## RADIOGRAFÍA DEL TRUJILLATO

Cuando los primeros 520 marines norteamericanos desembarcaron en República Dominicana, las últimas estadísticas al respecto fijaban la población económicamente activa del país en un 38,7% de su población total. El propio Juan Bosch, que acuñó (con certero oído de narrador) el término *tutompote* para designar a los integrantes de la oligarquía criolla, hubo de sustantivar una característica adverbial como intento definitorio: los *sintrabajo* crecen y se reproducen en las calles dominicanas; son lustrabotas, voceadores, vendedores de cigarrillos, mendigos. Un 56,5% de la población activa se concentra en las áreas rurales (ámbito vital, por otra parte, del 70% de la población total), donde un 11,7% de terratenientes posee el 76,7% de la tierra cultivable. En Santo Domingo (primera ciudad del hemisferio occidental, fundada por Diego Colón) se encuentra la universidad más antigua del continente, creada en 1538. Pero el 70% de la población dominicana es analfabeta. La isla es uno de los principales productores de azúcar, tabaco, cacao, café, plátanos y arroz: el 65% de sus exportaciones y el 80% de sus importaciones son controlados por Estados Unidos.

El control de Washington sobre República Dominicana iba empero, hacia 1965, mucho más allá de lo que puedan reflejar algunas cifras estadísticas: se basaba en el mismo origen de la dictadura que durante más de treinta años encabezó Rafael Leónidas Trujillo. Luego autoproclamado *generalísimo y benefactor*, Trujillo —un megalómano sádico y rapaz— accedió al poder como heredero de la intervención militar norteamericana que en 1916 instaló en él al capitán Knapp; las tres décadas que habría de durar su «administración» constituyen una de las páginas más turbias y trágicas de la historia latinoamericana. Su omnímodo poder, por otra parte, no se basó exclusivamente en el terror y la fuerza, sino también y especialmente en una impresionante acumulación de los resortes económicos nacionales: Trujillo controlaba centrales azucareros, industria lechera, ganadería, café, mineras, destilerías, laboratorios, fábricas de zapatos, cemento, astilleros, compañías de seguros; nada menos que el 85% del potencial económico del país. Sólo el Saturno imperial estaba en condiciones de devorar a su propio engendro.

170 Para valerse de un antecedente en su plan de creciente ahogo económico contra Cuba, Estados Unidos impuso, en 1959, a través de la OEA, sanciones económicas al régimen de Trujillo; esas sanciones comprendían el retiro de la cuota azucarera norteamericana. En 1961, empero, Washington descubrió que sus necesidades internas en materia de azúcar, como consecuencia de la escasa zafra nacional, lo obligaban a urgentes compras en el exterior; la única fuente posible en ese momento era República Dominicana, pero las sanciones de la OEA continuaban vigentes mientras Trujillo se mantuviera en el poder: es decir, mientras viviera. El 30 de mayo de 1961, Rafael Leónidas Trujillo fue asesinado por un grupo de complotados, del que sólo dos sobreviven hoy: uno en el exterior, otro encerrado en su casa, con fuerte custodia personal. Por cierto que ninguno de los participantes en la conjura era un idealista demócrata, como el poeta nicaragüense que asesinó a Tacho Somoza; los «héroes» del 30 de mayo aspiraban simplemente a la herencia del Generalísimo, a la perpetuación del trujillismo sin Trujillo. Sobre la avenida George Washington, en el lugar del atentado, se colocó una estela de granito. Hoy ha desaparecido: manos anónimas la arrancaron de su pedestal y la arrojaron al Caribe. En mayo de 1966, cuando pasé por el lugar, había un ramo de flores y una inscripción en la base de piedra: *Muerte a los comunistas.*

La herencia del *Benefactor* fue un campeonato de rapiñas, sobre todo en las Fuerzas Armadas (un total aproximado de 25 000 hombres). Los expedientes habituales han sido el contrabando y los negociados con el exterior. En este último rubro, el resorte era (es) sencillo: los mandos superiores de un arma presionaban al gobierno de turno —tarea fácil, ya que estaba generalmente integrado por sus propios colegas— para que el Estado realizara una costosa adquisición de armamentos y material de maniobras, indicando al vendedor «apropiado», del cual recibían personalmente suculentas comisiones: entre un 15 y un 20%. En cuanto al contrabando, bastan algunos montones de muestras: en 1964, la entrada de divisas alcanzó sólo a un 50% de lo previsto en virtud de la entrada ilegal de mercaderías. Por supuesto, se ha practicado también el contrabando «legal»: en 1964, la exoneración de impuestos a mercaderías adquiridas por miembros de las Fuerzas Armadas llegó a cincuenta y tres millones de dólares; durante el gobierno de Donald Reid Cabral, el propio primer triunviro (que era, privadamente, representante de la General Motors) se autoexoneró de todo gravamen para la importación de una enorme partida de vehículos.

Contra esta global institucionalización de la infamia no pudo Juan Bosch en apenas siete meses de gobierno constitucional. Contra ella se alzó el sector constitucionalista del ejército en abril de 1965, encontrando en su

camino la guerra civil y la intervención armada de Estados Unidos. Con ella como caldo de cultivo contaron luego el Departamento de Estado y la reacción nativa para consumir la fabulosa estafa que permitió a Joaquín Balaguer (*el Marichal de Palacio*, como proclamaba su propia propaganda electoral: *la viuda de Trujillo*, según lo apodan los dominicanos, aludiendo simultáneamente a su carácter de heredero del trujillato y a su inocultable misoginia) triunfar sobre el comunista Juan Bosch, instalando el décimo sexto gobierno que se ha impuesto al país en los ocho años que van desde la muerte del dictador.

### **BOSCH: AGUA DE COCO POR WHISKY**

A la muerte del *Benefactor*, fue Joaquín Balaguer quien hubo de apечugar por algunos meses con el clavo ardiente que significaba el poder en la explosiva isla del Caribe; pero la «restauración de la democracia» exigía que se convocara a elecciones. Así llegó a la presidencia Juan Bosch, un profesor y cuentista exiliado desde hacía varios años, reuniendo en torno a su Partido Revolucionario Dominicano (PRD) el 62% de los votos y convirtiéndose en el primer presidente constitucional en 38 años de historia nacional. No es misterio para nadie que, en esas elecciones de 1962, el favorito del Departamento de Estado era Viriatto Fiallo, candidato de la Unión Cívica y cabeza de la ultraderecha antitrujillista. Pero para Kennedy y sus *egg-heads*, en trance de liberales, la opción de aceptar a Juan Bosch, un intelectual reposado que había vivido su exilio en Puerto Rico, que era amigo de José —*Pepe*— Figueres, que definía a su PRD como inspirado en el Partido Populista de Muñoz Marín, que transpiraba anticomunismo por todos los poros, no era ciertamente demasiado desagradable. El presidente norteamericano llegó incluso —en un gesto de magnanimidad imperial que iba a servir de bien poco en definitiva— a presionar sobre la Esso Standard Oil para que rescindiera un contrato excesivamente favorable a la empresa suscrito por el gobierno de Balaguer. Y se propuso entusiastamente convertir República Dominicana en una *vitrina de la Alianza para el Progreso*.

Bosch comenzó entonces su labor de «saneamiento» interno. Tal vez la primera medida que adoptó como jefe de gobierno pueda ser entendida como un síntoma del rosado puritanismo político que habría de ser su mejor rostro y, al mismo tiempo, su perdición: inmediatamente después de su asunción, el whisky sería reemplazado por agua de coco en las recepciones gubernamentales. *Tú ves* —me diría algunos años después José Francisco Peña Gómez, íntimo y leal colaborador de Bosch, hoy secretario general del

172 PRD—, *era algo romántico, idealista*. En un balance retrospectivo, parece claro que el atlético profesor sobrestimó algunos factores de poder tanto como subestimó otros: no descuidó ciertamente acercarse a algunos oficiales de las Fuerzas Armadas (aunque eso no alcanzaba para quebrar la intrincada maraña interna de corrupción instaurada al calor del trujillato), pero en cambio pareció olvidar la necesidad de mantener latente el presunto apoyo de las masas, y de hacerles entender el alcance de las medidas que pretendía llevar adelante (antes de abandonar el gobierno, en una actitud típicamente demagógica que por supuesto no reportaba sino perjuicios para las finanzas públicas, Balaguer rebajó el precio del arroz y del aceite; en 1966, ese antecedente sería una de las cartas de triunfo de su campaña electoral); confió excesivamente en el apoyo personal de Kennedy, sin tomar en cuenta el verdadero poder de la estructura industrial-financiera norteamericana y de sus resortes extra gubernamentales; cortó al ras con las canongías y peculados heredados de los regímenes anteriores, ignorando que muy probablemente la amplia mayoría obtenida en las elecciones se debía al apoyo tácito del trujillismo, que veía en Viriatio Fiallo a su peor enemigo. Los partidarios de Bosch defienden aun hoy la labor emprendida por su gobierno; según ellos, se saneó la economía, se estabilizó la moneda, se dieron pasos firmes en la reducción de la deuda externa y en el incremento de la productividad, se racionalizó la administración pública y se iniciaron importantes proyectos de infraestructura. Es verosímil; tan verosímil como que las medidas en ese sentido implicaban herir fieramente los privilegios de las esferas de poder nativas y, sobre todo, de los grandes consorcios internacionales.

En julio de 1963, Bosch fijó el precio del azúcar en US\$ 5.82, lo que significó una pérdida de 25 millones de dólares para la South Porto-Rico Sugar Corporation; en agosto, abolió las comisiones de los altos jefes militares por armamento comprado en Estados Unidos; el 25 de setiembre, el gobierno constitucional instaurado apenas siete meses atrás es derrocado por las Fuerzas Armadas, dirigidas por Víctor Elby Román (graduado en la US Army School de Knox Ky), el general Elías Wessin y Wessin (graduado en Fort Gullick, Panamá, Zona del Canal), Miguel Atila y otros. Al día siguiente, Juan Bosch es embarcado para Puerto Rico; el *State Department* suspende las relaciones diplomáticas y la ayuda económica.

Hasta qué punto John Kennedy pueda haberse disgustado ante este sablazo contra la «vitrina» de la Alianza, resultaría hoy una controversia por lo menos bizantina; probablemente, sólo el crimen de Dallas impidió que JFK pusiera su firma al pie del reconocimiento al nuevo gobierno (un triunvirato militar encabezado por Donald Reid Cabral), que el *State Department* ex-

tendió el 4 de diciembre de 1963, menos de quince días después de su muerte. 173

El caso es que en poco más de doscientos días, el gobierno de Juan Bosch había jugado la carta de la democracia liberal burguesa en la escaldada isla, demasiado cercana a Cuba para el gusto de Washington. Los resortes de poder del imperio funcionaron coherentemente al avalar el golpe contra Bosch: la radicalización del proceso revolucionario cubano parecía probar, demasiado visiblemente, que un «desarrollismo» encabezado por sedicentes burguesías nacionales, pero en la órbita de Estados Unidos (lo que automáticamente convertía a aquellas «burguesías nacionales» en meros mascarones de los intereses monopolistas), era imposible en países como los del Caribe, penetrados hasta la médula por el capital norteamericano<sup>1</sup> y atados directamente a su política, donde el monocultivo, el raquítico desarrollo industrial y la inexistencia de un mercado de consumo interno tornan sumamente difícil el afianzamiento de una clase burguesa con apenas moderada inspiración nacionalista.

Con gobiernos como el de Reid Cabral, todo era infinitamente más fácil para Washington: no hacía falta siquiera contemplar la incongruente quisquillosidad «soberana» que a veces ataca a las «democracias» de, sur, al menos como clásico premio a un chantaje económico. El aparato de estabilización que Bosch había intentado montar trabajosamente fue echado al suelo de un plumazo: entre setiembre del 63 y marzo del 65, la deuda externa ascendió de 80 a 161 millones de dólares. Paralelamente, volvía a implantarse la política del terror; y aún el austero idealismo de Bosch podía parecer a los dominicanos un paraíso apetecible ante este nuevo intento de atrasar el reloj de la historia.

## INSURRECCIÓN AL BORDE DEL SUICIDIO

Esta breve relación de la historia previa a los acontecimientos de abril de 1965 resulta imprescindible para entender tal proceso: sólo la explotación económica y social, la dependencia y la opresión política, la reiterada frustración de los más tímidos intentos evolucionistas, pueden explicar el fenómeno singular en América Latina que transforma un levantamiento exclusivamente militar en una insurrección literalmente popular (de hecho, ha señalado agudamente algún observador: lo insólito no es que se produzca la insurrección de masas tan explotadas como las dominicanas, sino que

<sup>1</sup> El total acumulado de inversiones norteamericanas directas en República Dominicana llegaba en 1962 a ciento cuarenta y tres millones de dólares, pero hay una treintena de empresas donde el capital extranjero es mayoritario, entre ellas «Río Haina», el central azucarero más grande del mundo, sobre las cuales se carece de datos.

174 haya podido darse un levantamiento militar dentro de un aparato castrense tan corrupto como el heredado del trujillismo). Es también esa historia de dominio feudal y su contrapartida insurreccional lo que habrá de explicar más hondamente la decisión imperial en favor de una intervención directa y ciertamente cruenta.

Mientras la junta militar encabezada por Reid Cabral se dedicaba, con puntillosidad digna de mejor causa, a la vieja costumbre del saqueo, el acercamiento promovido por Bosch y su PRD con algunos miembros de la oficialidad militar venía rindiendo sus frutos. Teóricamente, 1965 debía ser año electoral (las elecciones habían sido fijadas para el 15 de setiembre), pero las maniobras continuistas resultaban evidentes aun para el menos suspicaz de los observadores; los militares «boschistas» urden en consecuencia un plan golpista, que debería concretarse el 1º de junio. A la altura de las primeras semanas de abril, el plan es decubierto parcialmente por oficiales «fieles» a la junta de Reid Cabral; alertados por la detención de algunos de los conjurados, los «boschistas» adelantan su pronunciamiento, alzándose el 24 de abril y nombrando presidente a Molina Ureña. Durante las primeras horas, la historia se parece demasiado a los típicos «planteos castrenses» habituales en América Latina: así, se arriba en principio a un acuerdo entre «rebeldes» y «leales» sobre la base de la renuncia simultánea de Reid y de Molina Ureña. Pero contra esta maniobra se alza a su vez el coronel Francisco Caamaño, y los acontecimientos se precipitan.

El 25 de abril, las tropas de Elias Wessin y Wessin bombardean el palacio presidencial y el centro de la ciudad desde la base de San Isidro. Los constitucionalistas toman entonces una decisión que habrá de determinar decisivamente el curso posterior de la historia: abren los arsenales al pueblo. Durante tres días, el pueblo armado resistirá a un alto precio en sangre los embates de las tropas regulares mandadas por Wessin y Wessin. Las organizaciones políticas progresistas cierran filas en torno a los militares constitucionalistas; Caamaño es designado presidente provisional —con el respaldo explícito de Bosch, que observa los acontecimientos desde Puerto Rico, sin terminar de decidirse a salir de allí— e integra un gabinete pluripartidista. Los contingentes populares al mando de Caamaño sufren fuertes bajas pero defienden a sangre y fuego el puente Duarte, sobre el río Ozama, que conduce de San Isidro a la ciudad; allí se escribirá durante setenta y dos horas una historia impar de heroísmo y martirologio, que el desembarco de los *marines* norteamericanos intentará luego, vanamente, borrar con sus botas.

El 28 de abril desembarcan 520 infantes de marina norteamericanos; pocas horas antes, Elías Wessin y Wessin, en uniforme de campaña y tocado con una borra de beisbol (estilo de *nonchalant* que los oficiales del Pentágono parecen apreciar sobremanera), había negociado la operación a bordo de uno de los buques de guerra que la US Army había ubicado velozmente en aguas próximas a la base de San Isidro. Simultáneamente con el desembarco de esos primeros centenares de *marines*, se integra una Junta Militar en la sede de la propia Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. Pero esos enjuagues no logran aplacar a las masas encabezadas por los militares constitucionalistas, que el 30 de abril toman el fuerte Ozama y vislumbran ya el triunfo cercano. La intervención norteamericana se hace en consecuencia masiva, y toma partido desembozadamente por Wessin: en algunas semanas, los *marines* llegarían a 22 000.

Paralelamente, el *State Department* ha echado a andar el mecanismo «interamericano». El 1º de mayo, ante la décima reunión de consulta de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada en Washington, el embajador norteamericano Ellsworth Bunker se refiere al desembarco de los *marines* y alcanza a decir sin rubor alguno: *Tal no es, ningún sentido, una intervención en los asuntos internos de República Dominicana. Las fuerzas de los Estados Unidos fueron despachadas por motivos únicamente humanitarios: proteger la vida no solamente de ciudadanos norteamericanos sino también de ciudadanos de otros países.* La OEA decide enviar a Santo Domingo a su secretario general, Mora Otero, con el fin de obtener una tregua de parte de los constitucionalistas y fijar una «zona de seguridad» que, con el pretexto de proteger a las embajadas extranjeras, oficiará de corredor para los *marines* y sus protegidos nativos; dos días después, tras haber oído en sesión secreta el informe de Mora Otero, resuelve (a propuesta de Washington) designar un comité de cinco naciones para actuar como observadores y mediadores en el problema.

Apenas veinticuatro horas después, el propio Lyndon Baines Johnson se encargará de desmentir a su embajador ante la OEA: *El movimiento revolucionario tomó un sesgo trágico (...) Lo que comenzó como una revolución democrática y popular, buscando democracia y justicia social, fue absorbida y colocada en las manos de un grupo de conspiradores comunistas (...) Las naciones americanas no pueden, y no deben, permitir el establecimiento de otros gobiernos comunistas en el hemisferio occidental.* El presidente norteamericano pretende avalar su afirmación con una lista de 58 *peligrosos* comunistas presuntamente infiltrados en el movimiento constitucionalista; poco tiempo después se comprobaría que, de esa lista,



176 los que no estaban muertos o fuera del país, ninguno tenía responsabilidades dirigentes en la rebelión.

El 3 de mayo, el Órgano de Consulta de la OEA se reúne para considerar una propuesta de Estados Unidos, calificada como *urgente* y destinada a crear una llamada *fuerza interamericana de paz* con el objeto de *ayudar a restaurar la ley y el orden en la República Dominicana*. Pese a la presión del *State Department*, empero, la propuesta convoca apenas trece votos, uno menos de los necesarios para completar los dos tercios exigidos para el caso por la reglamentación del organismo interamericano; en este punto, la historia alcanzó el nivel de tragicomedia con por lo menos una singular impudicia: la FIP fue finalmente creada, el 6 de mayo, con el voto decisivo de... República Dominicana, es decir, con el voto del representante de un gobierno inexistente, cuya desaparición era precisamente el pretexto esgrimido por Washington para decretar la intervención unilateral que ahora pretendía cohonestar con la decisión de la OEA. Pero esto es ya parte de otra historia, bien triste por cierto. A la altura del desembarco de los *marines*, una sospecha se había hecho ya especialmente evidente: tanto militar como políticamente, el levantamiento constitucionalista de abril era una *insurrección al borde del suicidio*. Si el heroísmo de miles de dominicanos pudo postergar por algunos días la consumación de ese sacrificio, la intervención norteamericana vino a dar cumplimiento definitivo a una sentencia nacida con la propia concepción del levantamiento y ratificada por su proceso posterior.

### LA ILUSIÓN LÍRICA

Algo más que la mera hipocresía se esconde tras la palmaria contradicción entre Ellsworth Bunker y Lyndon Johnson: notoriamente, *lo que comenzó como una revolución democrática y popular* se transformó luego en otra cosa, si se tiene en cuenta lo que para L.B.J. significa esa primera constancia y lo que debe entenderse cuando él define tal otra cosa como la acción de *un grupo de conspiradores comunistas*. Ciertamente, a la altura en que se produce tal contradicción, Washington sabe ya a qué atenerse, en tanto ha decretado y llevado a efecto la intervención militar unilateral en República Dominicana. Pero resulta inocutable que entre uno y otro extremo del razonamiento de Johnson corre una historia cierta y precisa y que en ella se inscribe no sólo el valor paradigmático que abril del 65 ha cobrado como signo de la política imperial, sino también y especialmente la razón primordial del fracaso de la insurrección dominicana.

Porque es cierto que la intervención de los *marines* abortó un triunfo que los constitucionalistas ya consideraban suyo, pero no menos cierto es que, a cierta altura de la historia, el levantamiento dominicano cobró un signo diferente al original, y que ese signo marca simultáneamente su real valor histórico y la inevitabilidad del recurso puesto en juego por el imperio. Los militares «boschistas» planearon un complot cuyas coordenadas no parecían apartarse del habitual motín palaciego; en su esquema, el levantamiento de una parte del ejército alcanzaba para «poner las cosas en su lugar», derrocar a la junta y concretar el retorno de Juan Bosch a una presidencia que le había sido arrancada por una maniobra simétricamente opuesta. Quizás contaban de alguna manera con la adhesión popular, con un movimiento «de opinión» capaz de respaldar su acción en el terreno militar, planeada como sorpresiva; pero todo lleva a suponer que los dirigentes del levantamiento no contaban con una participación activa y armada de las masas (en este punto me guió sobre todo por el relato que uno de los militares constitucionalistas, «exiliado» más tarde como agregado en una embajada sudamericana, me confiara meses más tarde sobre la distribución de armas entre el pueblo, en la que él tuviera acción protagónica). Cuando el alzamiento debe anticiparse, y debe incluso pasar por encima de la maniobra basada en la renuncia simultánea de Reid Cabral y Molina Ureña, la correlación de fuerzas y su disposición estratégica son las consideraciones específicas que parecen en presidir la decisión de abrir los arsenales a la población de Santo Domingo, mayoritariamente plegada al movimiento constitucionalista éste es el «punto de no retorno», el vértice que separa la *revolución democrática y popular* del *grupo de conspiradores comunistas* (según Johnson), el motín castrense de la insurrección popular (según la historia). A esa altura, el imperio ya no tiene dudas sobre el rumbo a tomar; pero, también a esa altura, el movimiento constitucionalista ha sellado su destino: política y militarmente, nace frustrado.

Militarmente, los constitucionalistas se ven encerrados entre el mar y las tropas de Wessin, sin poderío aéreo y casi enteramente sin artillería, sin apoyo logístico de clase alguna ni recursos exteriores a los cuales recurrir. El levantamiento se limita prácticamente a la capital y muy parcialmente a Santiago de los Caballeros (la segunda ciudad en importancia); en una confrontación de tipo convencional como la proyectada por los militares «boschistas», en una «guerra de posiciones», llevan todas las de perder: pueden resistir, quizás, pero fatalmente habrán de ser vencidos. No tienen siquiera la posibilidad de llevar a cabo una guerra de desgaste: sólo meses después, con la intervención ya consumada, algunos grupos pequeños obtendrán momentáneo éxito contra los *marines* en la llamada «guerra de

178 los callejones», expresión de guerrilla urbana para la que Santo Domingo resulta singularmente apropiada. Políticamente, la encerrona es similar: sin trabajo previo de agitación entre las masas, sin contacto con el resto del país (el campo permanece dramáticamente ajeno a los sucesos), prácticamente aislada del exterior, donde la propaganda enemiga trabaja a todo vapor, la insurrección aparece casi enteramente confiada al espontaneísmo, al generoso fervor de las masas, al impulso heroico capaz de llevar a un joven de quince años a estallar junto con el coctel molotov que lleva en la mano para detener a un tanque sobre el Puente Duarte, pero incapaz de lograr una victoria estratégica decisiva en el planteo general del enfrentamiento. Un corresponsal europeo, Marcel Niedergang, vio certeramente esta trágica frustración al escribir sobre *Santo Domingo o la ilusión lírica*.

Buena parte de esta deuda hay que contabilizarla contra la ingenuidad política de los militares constitucionalistas, indesmentibles hijos del rosado idealismo de Juan Bosch: esa misma ingenuidad los llevaría luego a confiar en el «acta de conciliación» de la OEA, tramposa fórmula de alto el fuego que les haría perder en el terreno diplomático mucho más de lo que hubieran perdido en el terreno militar. Porque de todos modos es imposible olvidar el papel jugado por ese heroísmo anónimo y masivo que fue quizás uno de los elementos determinantes de la apresurada decisión intervencionista de Washington, que no esperó siquiera a obtener el respaldo publicitario de sus hijastros interamericanos. La conclusión era trágicamente incontrastable: los insurrectos no habían aprendido las lecciones políticas y militares de la revolución cubana; Washington, por cierto, las había aprendido demasiado bien.

### **TEDDY ROOSEVELT RIDES AGAIN**

La insurrección popular de abril no fue más que una nueva reacción contra la dictadura; el elemental y hasta pueril «constitucionalismo» del movimiento fue visible no sólo en su principio, sino fundamentalmente en su final, en la burda trampa que Estados Unidos y la OEA cerraron sin mayores dificultades en el «acta de conciliación». Las agujas del reloj habían avanzado bien poco en siete meses: el alzamiento constitucionalista no era una revolución en el sentido socio-político del término, no reclamaba una profunda transformación de las estructuras ni la inscripción del desarrollo nacional en nuevos carriles de propiedad y distribución de riqueza; la inspiración del movimiento era meramente institucional, no tenía por cierto ningún punto de contacto con la palabra «socialismo». La insu-

rección de abril estaba aparentemente muy lejos de ser el comienzo de 179  
«una nueva Cuba». En rigor, estaba quizás tan lejos de serlo como la  
misma Cuba lo estuvo en enero de 1959. Hasta allí llegó el olfato de  
Washington; esa ventaja les llevó al instinto revolucionario (ya que no  
la sabiduría política) de los dirigentes constitucionalistas.

Para muchos —empezando por el propio Juan Bosch, aparentemente un  
romántico incorregible—, que el *State Department* se haya decidido a des-  
enterrar el *big stick* de Teddy Roosevelt se debe sobre todo a la presencia  
en la Casa Blanca del «villano» Lyndon Johnson en vez del «buen chico»  
John Kennedy. Quienes así razonan olvidan que el propia J.F.K. puso su  
firma al pie de la invasión de playa Girón en abril de 1961 y de la crisis  
de octubre en 1962; olvidan también que sus posaderas en el sillón de  
Lincoln no impidieron el *putsch* que derribó a Bosch en setiembre de 1963;  
y cuando prefieren recordar que el plan de Girón estaba ya en marcha  
bajo la administración Eisenhower, olvidan en cambio la constancia de que  
igualmente se puso en marcha bajo la administración Kennedy el meca-  
nismo que derrocaría a Goulart en abril de 1964. La historia no se hace  
sólo con iniciales, y el mismo asesinato de Kennedy se inscribe coheren-  
tamente en una interpretación desapasionada del fenómeno imperial, que  
ubique al sistema por encima de los hombres. Abril de 1965 probó una  
vez más que el instinto del imperio es más sutil y poderoso que sus me-  
canismos mentales. En Santo Domingo, las armas no estaban ya exclusi-  
vamente en manos militares, el alzamiento no era un habitual motín palaciego:  
si la revuelta triunfaba (en tanto la misma resistencia podía implicar, a  
la larga, una victoria así fuera histórica), si Bosch regresaba al país por  
la acción de las masas, éstas estarían en condiciones de determinar, por  
presión natural y espontánea, el camino definitivo de la política domini-  
cana. No eran los cincuenta y ocho (apócrifos) comunistas dominicanos  
quienes atemorizaban a Washington, sino los cientos de miles de mestizos  
hambrientos que podían llegar a comprender que «imperialismo» y «mi-  
seria» eran términos unidos indisolublemente, que no es posible terminar  
con ésta sin abatir a aquél.

Kennedy o Johnson, o Nixon, lo mismo da; en abril de 1965, L.B.J. no  
habría encontrado ningún problema en suscribir las palabras que cuatro  
años antes, con Playa Girón a la vista, había pronunciado Kennedy ante  
la Sociedad Americana de Editores de Periódicos: *Si ellos (los dirigien-  
tes de los estados americanos) tratan irresponsablemente de usar su poder  
numérico en la OEA, si llevan a extremos la doctrina de la no-intervención,  
no dejarán a Estados Unidos otra alternativa que la acción unilateral.*  
En el caso de República Dominicana, el *State Department* no esperó a que

180 la profecía se cumpliera: primero, decidió y llevó a cabo la intervención unilateral; después se ocupó de negociar a nivel de la OEA para que los restantes estados americanos no *llevaran a extremos* la doctrina de la no-intervención. Pocas veces como en este caso la organización interamericana se aproximó tanto a su célebre calificación de *ministerio de colonias* de Washington; el caso sería ridículo si no fuera, antes y sobre todo, vergonzoso. Y en él no sólo se ven comprometidos los gobiernos que enviaron tropas a Santo Domingo para integrar la FIP, sino aquéllos que votaron su integración aunque luego se hicieron los distraídos a la hora de poner soldados, aquéllos (todos) que permitieron sin rubores la burda maniobra de aceptar el fantasmal «voto 14», y aún aquéllos que se dieron el lujo de protestas públicas y formales por la intervención (gobiernos tan apegados al «institucionalismo» como los de Chile y México) sin que eso les impidiera continuar sentándose a la mesa de un organismo en el que uno de sus integrantes se permite violar desembozada y reiteradamente los principios cardinales sobre los que presuntamente se basa tal asociación. Quizás convenga apelar a un testimonio insospechable, como el del especialista inglés Gordon Connell-Smith,<sup>2</sup> para subrayar esta conclusión: *La crisis dominicana ha echado luz sobre algunas de las características cardinales del sistema interamericano. En primer lugar, ilustra muy bien el dominio de los Estados Unidos sobre el sistema y hasta qué punto la fortuna del segundo depende de la política del primero. La gran disparidad de poder del «Uno» y de los «Veinte» (o, más bien, 19, con la exclusión de Cuba) está subrayada por la capacidad de los Estados Unidos de violar el más fundamental de los principios del sistema, no solamente escapando a la censura abierta sino recibiendo, inclusive, medidas sustanciales de endoso por sus acciones.*

Esta constancia, que ya era clara para muchos antes de 1965, no fue empero tomada en cuenta por los dirigentes constitucionalistas; algunos meses después, algunos de ellos (Caamaño inclusive) me confiarían su desencanto y sus nuevas conclusiones, síntomas de una maduración a golpes. Pero la suerte de la insurrección ya había sido echada para entonces.

## LOS CAMINOS DE LA REVOLUCIÓN

Ciertamente, la «operación Santo Domingo» no fue cerrada por Washington con el desembarco de sus *marines*, ni con la creación de la FIP, ni siquiera con el «acta de conciliación». Todos estos mecanismos fueron necesarios para volver a detener las agujas del reloj; pero en cuatro meses de guerra

<sup>2</sup> En *The Interamerican System*, Oxford, 1966.

civil, y de enfrentamiento directo con el imperio, esas agujas habían marchado mucho más rápido que en siete meses de gobierno constitucional. Ineluctablemente, la misma intervención destinada a abortar el proceso no hacía más que acelerarlo, cambiaba su signo de una vez para siempre, trocaba el petardo por una bomba de tiempo. El paso siguiente debía ser, pues, desarmar el mecanismo de la bomba.

Para salvar la poca cara que le quedaba, el *State Department* no podía propiciar la instalación de una nueva junta militar; así, se convocaron las elecciones presidenciales que debían, otra vez, «restaurar la democracia» en la convulsionada república. En junio de 1966, la demagogia, el fraude, el terrorismo desatado, impusieron como presidente a Joaquín Balaguer, en una parodia comicial que el propio Juan Bosch cohonestó con su participación. Las pugnas preelectorales enemistaron entre sí a las fuerzas que se habían aliado durante la insurrección en torno a las banderas constitucionalistas; el camino politiquero diluyó y ablandó la fuerza de las masas; el propio PRD resultó quebrado, tras el triunfo de Balaguer, por el interesado ofrecimiento de un *gobierno de conciliación nacional*. Los jefes militares constitucionalistas estaban desterrados (por la «vía diplomática» que los situó en diversas agregaturas en el extranjero), asesinados o confinados en un cuartel sin mando de tropas; su *reintegración a las Fuerzas Armadas* —uno de los compromisos asumidos por la OEA en el «acta»— no se cumpliría nunca más allá del papel. El *dossier* de abril de 1965 quedaba así cerrado, pero su misma conclusión abría otro, mucho más amplio e inquietante: el de la represión imperialista a escala continental.

Washington se propuso ampliar la idea de la FIP y propiciar la creación de una fuerza continental institucionalizada; el proyecto seguiría un accidentado camino en el marco de la OEA, asumiendo diversas formulaciones en las varias instancias de la undécima reunión de consulta, que prologó la reunión de presidentes americanos (Punta del Este, abril de 1967), sobre la cual también planearía, sin animarse a tomar cuerpo, el mismo espectro. Variados factores —el temor de extender un cheque en blanco que podría volverse en cualquier momento contra sus firmantes, intereses «nacionalistas» contrapuestos en pugna geopolítica, necesidad de preservar su imagen interna por parte de algunos regímenes— impidieron la concreción de la propuesta. Pero allí donde los hilos diplomáticos del *State Department* fallaban, el Pentágono adelantaba por un camino que ya había comenzado a trillar en 1960: las Conferencias de Ejércitos Americanos (VI, 1965, Lima —por primera vez en territorio latinoamericano; las anteriores se habían realizado en la zona del canal de Panamá y en West Point—; VII,

182 1966, Buenos Aires; VIII, 1968, Río de Janeiro) van orquestando la acción represiva conjunta de los cuerpos armados latinoamericanos, que simultáneamente se han ido convirtiendo en gobiernos por virtud de cuartelazos encadenados. Aún sin corporizar una fuerza continental estable, los ejércitos latinoamericanos se iban paulatinamente ensamblando en la estrategia «antisubversiva» del Pentágono, bajo la instrucción de los «boinas verdes» y con un creciente entrelazamiento de sus aparatos de información y seguridad.

Pero, paralelamente, también las fuerzas revolucionarias procuraban su ya imprescindible coordinación: la conferencia tricontinental (La Habana, enero de 1966) y la primera reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS, La Habana, julio de 1967) propician la consolidación de una estrategia común para oponer al dominio común del imperialismo sobre el llamado tercer mundo. En ellas, los revolucionarios latinoamericanos intentan plasmar algunas de las lecciones extraídas de la historia de Santo Domingo en 1965:

- Una *putsch* exclusivamente militar resulta una fórmula inviable para el movimiento revolucionario: enfrentado a la mayoría reaccionaria de los cuerpos armados, debe confiarse a las masas o perecer.<sup>7</sup>
- Una insurrección, librada meramente al espontaneísmo y al fervor popular, confinada en áreas urbanas, paga un altísimo precio en sangre por la sola posibilidad de resistencia, pero resulta fatalmente aplastada, si no por la represión nativa, directamente por la intervención imperial.
- El imperialismo no vacila en intervenir directamente allí donde se sienta aún lejanamente amenazado, incluso sin apelar a preparativos diplomáticos ni a máscaras jurídicas. De aquí en más, la lucha de liberación en el continente habrá de pasar, de manera prácticamente inevitable, por una confrontación directa con tropas norteamericanas.

<sup>7</sup> Este artículo fue escrito varios meses antes de desatarse el proceso que actualmente —la presente llamada ha sido añadida al original en agosto de 1969— vive el Perú; la sustancia de esta conclusión no alcanza empero a ser alterada por tales hechos. En primer lugar porque la llamada «revolución peruana» conducida por algunos sectores de las Fuerzas Armadas es aún una instancia abierta, a la cual es por lo menos apresurado otorgar carácter de comprobación histórica (en este punto, a lo sumo, conduciría a dudar sobre la afirmación que establece la mayoría reaccionaria de los cuerpos armados). Pero, sobre todo, porque la instancia final para el juicio histórico sobre el proceso peruano aparece planteada en los mismos términos que dicha conclusión refiere: aun cuando un *putsch* pueda conducir al poder a un grupo revolucionario, la revolución real sólo ofrece una alternativa: confiarse a las masas o perecer.

—Sólo un sólido aparato de cuadros de rigurosa formación política y militar, que se muestre capaz de conducir a las masas al mismo tiempo que las protege de la acción represiva de los aparatos armados del estado burgués, está en condiciones de llevar hasta su culminación la lucha revolucionaria. 183

—La única manera de derrotar al imperialismo es obligarlo a diversificar sus frentes, privarlo de sus fuentes de sustentación, conducirlo a terrenos desconocidos y hostiles, hostigarlo al mismo tiempo desde todos los ángulos. Esto implica la necesidad de una estrategia común a nivel continental, capaz de plantear una lucha coordinada y asumirla con abierto espíritu internacionalista.

Francisco Caamaño tenía razón: el reloj de la historia se detiene pero no se atrasa. En abril de 1965, mientras él encabezaba a los héroes y los mártires anónimos de su pueblo, a escasos kilómetros de Santo Domingo un hombre se aprestaba a partir en busca del destino que la intervención norteamericana estafaría una vez más a los quisqueyanos; dos años después, desde el corazón del continente, ese hombre lanzaría la consigna que resume inmejorablemente las lecciones aprendidas en abril de 1965 y que signa ya la lucha revolucionaria latinoamericana, irreversiblemente: *Crear dos, tres, muchos Viet Nam.*